

**TRABAJO DE FINAL DE GRADO EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN**

*TREBALL DE FI DE GRAU EN TRADUCCIÓ I
INTERPRETACIÓ*

Departament de Traducció i Comunicació

TÍTULO / TÍTOL

El prestigio social del intérprete en el punto de mira:
la interpretación judicial en Castellón

Autor/a: Cristina Lozano García

Tutor/a: María Amparo Jiménez Ivars

Fecha de lectura/ Data de lectura: junio de 2020



Resumen/Resum:

El prestigio social del intérprete judicial se ve afectado debido al desconocimiento de su profesión y de la importancia del intérprete dentro del sistema judicial. Esta figura debería equivaler a la protección de las garantías procesales de las personas y del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva cuando existen barreras idiomáticas.

Los objetivos del siguiente trabajo son: entender las raíces de la profesión del intérprete judicial, visualizar la situación de nuestro país, dar una aproximación a la cuestión de si en España es necesario un registro de traductores e intérpretes debidamente cualificados y estudiar el estatus social del intérprete judicial en Castellón.

Si nos remontamos al pasado, observamos que con las Leyes de Indias se trató de regular la profesión del intérprete dentro del marco judicial. Sin embargo y, a día de hoy, los servicios de interpretación judicial en España han sufrido la falta de regulación, de modo que la prestación de dichos servicios se ha visto agraviada. La prestación de estos servicios se ha externalizado cayendo en manos de empresas ajenas, dando así paso al modelo de contratas. Estas empresas no realizan controles de calidad ni se aseguran de que las personas que contratan sean intérpretes debidamente cualificados, por lo que no pueden asegurar la profesionalidad del oficio. La buena praxis del intérprete no solo consiste en realizar un eficiente traslado de información entre idiomas, sino que conlleva el conocimiento del ordenamiento jurídico español.

Para aproximarnos a lo descrito anteriormente, se presenta un estudio empírico que trata la percepción de los intérpretes judiciales y las expectativas sobre la figura del mismo por parte de ocho operadores judiciales de Castellón. Con este estudio, concluimos la evidente falta del prestigio por parte de la población y de un registro de traductores e intérpretes anteriormente propuesto por la Unión Europea en la Directiva 2010/64/UE.

Palabras clave/Paraules clau:

interpretación judicial; prestigio social; Directiva 2010/64/UE; Registro de Traductores e Intérpretes; operadores judiciales

Introducción	4
Interpretación judicial: una breve descripción	6
Antecedentes históricos de la interpretación judicial en el contexto español	8
Edad moderna: leyes de indias	8
Edad contemporánea	10
Actualidad en España: la Directiva 2010/64/UE	11
Situación post-directiva en España	12
Formación y certificación	14
Grado y posgrado	14
Certificación y acceso a la función pública	14
Funciones del intérprete judicial en el marco penal	17
Código ético	18
Estudio empírico	22
Cuestionario	22
Procedimiento	22
Resultados	23
Perfil sociológico	23
Trabajo con el intérprete	23
Actividades proactivas del intérprete	25
Expectativas del operador judicial	26
Discusión	28
Conclusiones	29
Bibliografía	32
Anexos	34
Código ético de EULITA	34
Cuestionario	36
Encuesta	36
Bloque de preguntas por defecto (1 pregunta)	36

1. Introducción

La motivación para la realización de este trabajo radica en mi propia experiencia como auxiliar de control en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y en el festival Rototom Sunsplash durante el periodo que comprende los años 2016-2019. Durante dicha experiencia, tanto como voluntaria como personal contratado, me vi en la situación de ayudar a la Policía Local y Nacional y a la Guardia Civil en situaciones donde la comunicación se veía comprometida por la falta de conocimiento de lenguas. Estas intervenciones, si bien breves, me hicieron reflexionar acerca de la labor de los intérpretes de enlace. Este pensamiento coincidió con mis primeros años de carrera, momento en el que me encontraba un poco perdida en lo referente a cómo enfocar mi futuro laboral, lo que me incentivó a decantarme totalmente por la rama de especialización en interpretación. Este último año, cursar la asignatura TI0954 Mediación Intercultural e Interpretación A1 (Español) - B (Inglés) / B (Inglés) - A1 (Español) en los Servicios Públicos ha abierto para mí la puerta a nuevas reflexiones no solamente acerca de la labor de los intérpretes en los servicios públicos, pues en gran parte ayudan a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, sino también acerca de las implicaciones éticas y profesionales derivadas del desarrollo de su ejercicio profesional.

Como explicaremos a lo largo de este trabajo, el hecho de que los derechos en materia penal no estuviesen regulados a nivel europeo, fue suficiente motivo para la aprobación de la Directiva 2010/64/UE, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Con el objetivo de incluir dicha Directiva en el ordenamiento jurídico español, se aprobó la Ley Orgánica 5/2015. Sin embargo, la Directiva también estableció en uno de sus artículos, concretamente el 5.2, que los Estados miembro debían crear uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados, requisito que España no cumplió.

Blasco Mayor y Del Pozo Triviño (2015, p.16) expresan que, en España, las mismas empresas adjudicatarias del servicio “son las encargadas de escoger a los traductores e intérpretes, de establecer los requisitos para su contratación (mínimos en la mayoría de los casos), así como de determinar sus condiciones

de trabajo”, razón por la que los profesionales no aceptan el servicio desde un principio. Atendiendo a esta situación, vemos que realmente no se tiene en cuenta la importancia de la labor de los intérpretes judiciales y que dicha actividad tiende a estar en manos de personas sin formación.

Si queremos garantizar los derechos de las personas en tribunales y comisarías, es precisa la creación de al menos un registro de traductores e intérpretes acreditados o cualificados para que la situación cambie. Dicho cambio, cumpliría con lo establecido en el artículo mencionado anteriormente de la Directiva 2010/64/UE y aseguraría la calidad del servicio en los procesos judiciales.

Los objetivos del presente trabajo son: entender las raíces de la profesión del intérprete judicial, visualizar la situación de nuestro país, dar una aproximación a la cuestión de si en España es necesario un registro de traductores e intérpretes debidamente cualificados y estudiar el estatus social del intérprete, concretamente en el ámbito judicial, en la ciudad de Castellón.

El trabajo está dividido en dos bloques: un marco teórico que abarca la descripción de la interpretación judicial, los antecedentes de la interpretación judicial en el contexto español, la Directiva 2010/64/UE, la formación y certificación del intérprete judicial en España, las funciones del intérprete judicial en el marco penal y el código ético. El segundo bloque del trabajo comprende un estudio empírico. En este estudio, algunos operadores judiciales de Castellón evalúan sus experiencias en situaciones en las que intervienen intérpretes para así hacer constar su opinión sobre la concepción que tienen del intérprete judicial y qué esperan de la labor del mismo.

2. Interpretación judicial: una breve descripción

Para poder definir la interpretación judicial, lo primero que debemos saber es que constituye una de las disciplinas de la traducción e interpretación en los servicios públicos (T/ISSPP) aunque a veces se excluye de ésta y se presenta como una disciplina en sí misma.

Por una parte, destacaremos que el objetivo de la T/ISSPP es posibilitar la comunicación entre un público específico “que responde a una minoría cultural y lingüística” (Valero Garcés, 2003, p.5) y un grupo mayoritario de trabajadores en los servicios públicos (hospitales, comisarías, centros de ayuda social, etc...) que desconocen y no comprenden las diferencias culturales, lo que supone un problema para la comunicación incluso mayor que el propio idioma. (Roberts, 1997)

Por otra parte, es crucial diferenciar entre la traducción jurídica, la traducción e interpretación jurada y la traducción e interpretación judicial, figuras que a menudo se confunden debido a la falta de conocimiento general de estas nomenclaturas:

- a) Traducción jurídica: se refiere a la traducción de aquellos documentos cuya naturaleza se enmarca en cualquier rama del derecho, pudiendo ser textos legislativos, manuales de derecho o artículos científicos sobre temas jurídicos (Lobato Patricio, 2009, p. 195).

- b) Traducción e interpretación jurada: son aquellas traducciones oficiales realizadas por este tipo de fedatarios públicos, es decir, por un Traductor-Intérprete Jurado acreditado por el MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación). En España, el Traductor-Intérprete Jurado se encarga, entre otras cosas, de traducir tratados y convenios de los que España forma parte, de la traducción de documentos de carácter diplomático, consular o administrativo y de interpretar en actos en los que intervengan representantes de los órganos superiores de la Administración del Estado. Éstos trabajan desde y hacia el idioma para el que ha sido autorizado por el MAEC y sellan con su apostilla. Dicha

apostilla se trata de un sello que está incluido en el registro de Traductores e Intérpretes del MAEC y otorga un carácter legal y oficial a la traducción realizada (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2015).

- c) Traducción e interpretación judicial: es la traducción llevada a cabo por aquellos traductores que trabajan en juzgados y tribunales y cuya función es traducir todo documento que forme parte de un proceso judicial (sentencias, autos, informes de interrogatorios) mientras que la función del intérprete consiste en traducir oralmente en procesos judiciales las intervenciones en sede policial y juicios, las llamadas telefónicas y hacer traducciones a la vista de documentos que no se hayan traducido previamente por escrito. (Lobato Patricio, 2009, p.195). Ortega Herráez (2011, p.43) define el concepto de *interpretación judicial* como un “subgénero de la interpretación jurídica”, entendiendo esta última como la modalidad de interpretación que tiene relación con todo marco en el que se desarrollen actuaciones de carácter jurídico (comisarías, juzgados, tribunales, servicios de inmigración, prisiones, etc.), cuyo objetivo es “garantizar la igualdad de condiciones en sus relaciones con la justicia a toda persona que no comparta el idioma del tribunal” (2006, p. 91).

3. Antecedentes históricos de la interpretación judicial en el contexto español

3.1 Edad moderna: leyes de indias

Es complicado situar cronológicamente el origen de la interpretación judicial, pues la interpretación en su sentido más general entendida como el traslado de información de una lengua a otra, “es tan antigua como la humanidad misma”. (Valero Garcés, p.1, 2008)

El origen de la necesidad del intérprete judicial en el contexto español surgió debido a la disparidad de lenguas existentes en América tras la llegada de los conquistadores y a la necesidad de comunicarse con los representantes de la Corona. En los virreinos se constituyeron órganos judiciales donde se dictaron una serie de normas específicas que defendían el derecho de las personas que no fueran hispanohablantes. Hoy en día, tal y como recoge Peñarroja Fa (2004) tenemos conocimiento de estas normas gracias a la *Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por Carlos II*. La primera norma de la que se tiene constancia se remonta a 1529, la cual establece la contraprestación que los intérpretes podían obtener por sus servicios:

El emperador D. Carlos y la Reina Gobernadora en Toledo a 24 de agosto de 1529.

Mandamos que ningún intérprete, o lengua de los que andan por las provincias, ciudades y pueblos de los indios a negocios ó diligencias que les ordenen los gobernadores y justicias, ó de su propia autoridad, pueda pedir, ni recibir, ni pida, ni reciba de los indios para sí, ni las justicias, ni otras personas, joyas, ropas, mantenimientos ni otras cosas, pena de que el que lo contrario hiciera pierda sus bienes para nuestra cámara y fisco, y sea desterrado de la tierra, y los indios no den más de lo que sean obligados á dar á las personas que los tienen en encomienda.

La siguiente norma apareció ocho años después, en 1537, y consistía en arbitrar soluciones para evitar los posibles errores que cometían los intérpretes.

No fue hasta 1563, bajo el mandato de Felipe II, que se dictaron un conjunto de reglamentos con instrucciones precisas, incluyendo entre éstos la actividad de la profesión, el protocolo a seguir antes de la celebración del juicio y el código ético exclusivo de la profesión.

D. Felipe II en Monzón a 4 de octubre de 1563, Ordenanza 297 de Audiencias.

Que haya número de intérpretes en las audiencias, y juren conforme á esta ley Ordenamos y mandamos que en las audiencias haya número de intérpretes, y que antes de ser recibidos juren en forma debida, que usaran su oficio bien y fielmente, declarando e interpretando el negocio y pleito que les fuere cometido, clara y abiertamente, sin encubrir ni añadir cosa alguna, diciendo, simplemente el hecho, delito ó negocio, y testigos que se examinaren, sin ser parciales á ninguna de las partes, ni favorecer mas á uno que á otro, y que por ello no llevarán interés alguno más del salario que les fuere tasado y señalado, pena de perjuros, y del daño é interés, y que volverán lo que llevaren, con las setenas y perdimiento de oficio.

A esta ordenanza le suceden otras (concretamente en 1583 y 1630) con el fin de pulir los detalles de la profesión y de recordar la importancia de la tarea de los intérpretes. A mediados del siglo XIX y debido a que España seguía conservando colonias en América, la figura del intérprete judicial pasó a denominarse *intérprete público* mediante la Real Orden de 16 junio de 1839. En este reglamento se especifican las facultades del intérprete, pudiendo interpretar tanto para las autoridades como para particulares (Cáceres Würsig y Pérez González, 2003).

En lo que concierne a España en sí, la necesidad de un organismo específico dedicado a la mediación lingüística se hizo ostensible debido a las relaciones interestatales de los estados modernos. Para ello, Carlos V creó en 1527 la Secretaría de Interpretación de Lenguas al mismo tiempo que surgió el Consejo del Estado. Diego Gracián de Alderete, discípulo de Luis Vives, fue el primero en ser nombrado Secretario de Interpretación de Lenguas. Dicho cargo se asoció con la familia Gracián durante los siglos XVI y XVII, ya que lo ocuparon

durante casi 190 años, exceptuando algunos periodos en los que fue ocupado por personas ajenas a la familia. Desde principios del siglo XVII y análogamente a la Secretaría, otros traductores también trabajaban en otros órganos de la Administración, como por ejemplo en el Consejo de Estado, la Secretaría del Consejo de Flandes (1650) y la Secretaría de Estado de la Negociación del Norte (1664) (Cáceres Würsig, 2004).

3.2 Edad contemporánea

No fue hasta la época de Ceferino de Cevallos (Secretario de la Interpretación de Lenguas de 1840 a 1855) que “el intrusismo en la traducción de documentos que debían presentarse ante tribunales fue una práctica constante” (Cáceres Würsig y Pérez González, 2003, p.3). Se dictó por ello una orden que declaraba ilegales todas aquellas traducciones que no se hicieran mediante la Oficina de Interpretación de Lenguas. Esta orden generó mucho descontento en los tribunales, hecho que dio pie a la publicación de una Real Orden en 1843 que autorizaba la situación de los intérpretes judiciales en todos los tribunales del reino (Cáceres Würsig y Pérez González, 2003, p.4).

Fue en 1851 cuando se celebraron los primeros exámenes en la misma Secretaría de Interpretación de Lenguas para poder traducir documentos y recibir un título de intérprete jurado. Esta situación no se dilató en el tiempo ya que, en 1853, debido a la imposibilidad de desplazamiento a Madrid por parte de los candidatos a intérprete judicial, se dictó otra Real Orden la cual habilitaba a cualquier persona con conocimientos en el idioma necesario para la traducción pericial.

La primera norma legislativa de rango de ley que regula a las *Carreras Diplomática, Consular y de Intérpretes* se aprobó el 24 de julio de 1870. Esta norma “reconoce el carácter facultativo e inamovible de los empleados de las mismas al tiempo que sienta las bases para una organización general de las funciones consulares” (Cáceres Würsig, 2004, p.57).

Hasta casi la actualidad, se consideraba como práctica habitual el hecho de que los jueces nombraran a un maestro del idioma previo juramento de su cargo. Esto aparece contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882:

“en su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa” (LEC, art. 411) y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985: “en las actuaciones orales, el Juez o Tribunal podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla” (LPJ, III.1.231).

La necesidad de la figura del traductor-intérprete como personal de plantilla en lo que concierne a la Administración de Justicia se remonta a finales de los años ochenta (Sali, 2003). La primera oferta de empleo para el cargo de traductor-intérprete de plantilla hecho por el Ministerio de Justicia data de 1987.

3.3 Actualidad en España: la Directiva 2010/64/UE

El contexto de globalización trajo consigo un aumento considerable del número de procesos penales plurilingües en la Unión Europea. Si nos remontamos al año 2009, concurríamos con el nacimiento del Programa Estocolmo. Este proyecto de trabajo tenía como objetivo establecer un conjunto de pautas en relación a la seguridad y la justicia europea para así hacer de Europa un espacio justo, seguro y libre. El Programa Estocolmo consideró, entre muchos otros aspectos, la necesidad básica y real de los ciudadanos europeos de entender el idioma cuando se veían envueltos en los procesos penales, la cual nunca antes había sido regulada a nivel europeo.

La Unión Europea se fijó los objetivos, por un lado, de promover la protección de los derechos de las personas y la cooperación de los Estados miembro y, por el otro, de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en materia penal para los países que constituyen la Unión Europea. Para llevar estos objetivos a cabo, se aprobó la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre.

El diccionario del español jurídico (DEJ) define el término *directiva* como un acto jurídico adoptado por las instituciones de la Unión Europea que obliga a los Estados a la consecución de un fin dejando a las administraciones nacionales libertad para elegir la forma y los medios. Así pues, La Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre, se compone de 12 artículos. De ellos cabe destacar los artículos 2, 3, 5 y 9, pues tratan del derecho a la traducción y la interpretación, la calidad

de las mismas y la incorporación de la Directiva a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembro. Tal y como se ve recogido en la Directiva, la finalidad de la misma es “que los Estados miembros pongan en marcha mecanismos que garanticen la calidad de la interpretación y de la traducción en los procesos penales a fin de que se pueda garantizar el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo, para reforzar la confianza mutua entre sí”. (Blasco Mayor y Del Pozo Triviño, 2015, p. 12)

Para garantizar dicha calidad, en el artículo 5.2 se especifica la propuesta a los Estados miembro de la creación de un registro de traductores e intérpretes cualificados. De acuerdo con lo recogido en el artículo 2.1 y 2.2, del derecho a interpretación, el acceso a ésta también debe abarcar el interrogatorio en sede policial, todas las vistas y juicios, así como también todo tipo de comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado. Asimismo, a lo largo del artículo 5 se menciona la importancia de la calidad de la interpretación y de que las autoridades competentes la garanticen, pudiendo éstos solicitar, en el caso de que no se garantice la calidad del servicio considerada suficiente, la sustitución del intérprete.

Hoy en día, existen cuatro Directivas que garantizan el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva que incluyen el derecho a la traducción y la interpretación judicial y policial en los procesos penales. Las tres directivas posteriores (Directiva 2012/29/UE, Directiva 2012/13/UE y Directiva 2013/48/UE) a la Directiva 2010/64/UE sirvieron de refuerzo a las garantías contempladas por la primera directiva, aparte de que todas consideran el derecho a interpretación y traducción una garantía *de facto* para que víctimas y encausados puedan hacer efectivos sus derechos (Blasco Mayor y Del Pozo Triviño, 2015).

3.4 Situación post-directiva en España

Según el Artículo 9 de la propia Directiva, la fecha límite para que los Estados miembro incluyeran la dicha en sus respectivos ordenamientos jurídicos era finales de octubre del año 2013. No fue hasta que se cumplió ese plazo que España aprobó un anteproyecto de Ley en el cual se intentó incluir la Directiva 2010/64/UE en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero la forma en la que el Gobierno quería trasponerla no acababa de ser ni convincente ni precisa del

todo. Tras ser España advertida en julio de 2014 por la Comisión Europea y con el plazo de dos meses para aplicar la directiva, acabó por aprobar en agosto de 2014 el Proyecto de Ley Orgánica.

Un año después, se aprobó la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. Esta última ley recogía en su artículo 231.5 que “la habilitación como intérprete en las actuaciones orales o en lengua de signos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable” (art. 231.5 LRJSP, de 1 de julio). En 2009 este artículo se modificó de manera que “en las actuaciones orales se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla”. (Art. 231.5 LRJSP, de 3 de noviembre)

La Ley Orgánica 5/2015 se aprobó con el fin de transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (LRJSP 5/2015, de 28 de abril). Esto supuso entonces y, supone hoy en día, que la interpretación y la traducción afecten y sean parte del núcleo esencial de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de derechos e intereses legítimos ante los tribunales sin que pueda producirse indefensión, a ser informado sobre la acusación, al derecho a un proceso público con todas las garantías y al derecho de defensa, recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española, en virtud del artículo 81 de la misma. (CE, 1978)

La ley del Registro de Traductores e Intérpretes judiciales se planteó como un instrumento que garantizase la calidad de la traducción y la interpretación en los procesos penales, de ahí la gran importancia de esta ley, para así acreditar sus capacidades para ejercer esta compleja labor, pues es la única forma de proteger las garantías procesales de las personas, tanto de los acusados o investigados como de las víctimas o testigos.

Pese a que en el cuarto apartado del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2015 en cuanto al Registro Oficial de traductores e intérpretes judiciales indica que se presentaría un proyecto de Ley para la creación del mismo, pocos han sido los

cambios a nivel práctico. En España se ha consolidado el modelo de provisión de servicios mediante licitaciones o “modelo de contratas”, siendo a menudo estas propias empresas las adjudicatarias del servicio (Blasco Mayor y Del Pozo Triviño, 2015, p. 15-16). Este modelo ha sido objeto de fuertes críticas debido a diversos factores, entre ellos, que la remuneración del servicio puede llegar a ser realmente baja. Este hecho ejerce un efecto disuasivo entre los profesionales formados y es por ello por lo que acaban contratando a personas bilingües (o que aseguran serlo) y sin ningún tipo de formación ni especialización.

4. Formación y certificación

4.1 Grado y posgrado

España con toda probabilidad supera al resto de países de la Unión Europea en cuanto a número de universidades que ofrecen el grado de Traducción e Interpretación. A día de hoy, cuenta con veinte universidades en las que se pueden cursar estudios de Traducción e Interpretación. Algunas de estas universidades tienen planes de estudios más generalistas y otras más especializados. Esto también afecta a nuestro objeto de estudio de este trabajo, la interpretación en el ámbito judicial, puesto que el número total de universidades españolas que ofrecen formación en el área de la interpretación y la mediación en los servicios públicos se limita a cinco, entre ellas la universidad Jaume I de Castellón, bajo la titularidad de la doctora María Jesús Blasco Mayor. Esta formación no se limita a los grados, sino que también existen diferentes cursos de posgrado o másteres de especialidad impartidos por universidades como el de la Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad Autónoma de Barcelona.

4.2 Certificación y acceso a la función pública

En cuanto a los procesos de certificación a los que se pueden someter los intérpretes judiciales en España se presentan diversas opciones:

- a) Acceso al Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado: está constituido por funcionarios públicos. Se realizan por oposiciones que convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Para

acceder al Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado no se exige haberse graduado en Traducción e Interpretación ni poseer conocimientos específicos en la materia, sino que basta con estar en posesión de cualquier grado universitario más una demostración de destrezas lingüísticas y traductoras. El proceso selectivo consta de cinco ejercicios que abarcan, con y sin ayuda de diccionarios, desde una prueba tipo test de opción múltiple hasta traducciones de diferentes especializaciones, desde y hacia la lengua y modalidad elegida por el opositor, una prueba escrita en la que se desarrollan tres temas de cuatro que propone el Tribunal y que constituyen el temario.

- b) Traductor-Intérprete Jurado: el acceso al ejercicio de esta profesión está limitado a aquellas personas habilitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. La característica principal de las traducciones o interpretaciones que son realizadas por los traductores/as e intérpretes jurados/as es su carácter oficial, pudiendo ser aportada ante los órganos judiciales y administrativos. Los traductores e intérpretes jurado certificarán con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones, empleando la fórmula dictada por el Ministerio. Requiere de una certificación oficial. La vía principal de obtención de este título es el examen que, a tal efecto, convoca anualmente el Ministerio, la cual está regulada según la Orden de 8 de febrero de 1996 por la que se dictan normas sobre los exámenes para el nombramiento de Traductores-Intérpretes Jurados. La acreditación se consigue tras superar el examen correspondiente mencionado anteriormente, el cual se divide en tres fases: la primera fase es una prueba tipo test de carácter gramatical y terminológico, la segunda consta de tres traducciones (con y sin diccionario) directas e inversas de documentos periodísticos, ensayísticos y jurídicos o económicos y, por último, una interpretación consecutiva directa e inversa.
- c) Traductores e Intérpretes del Ministerio de Justicia: existen tres tipos de traductores-intérpretes. Los traductores-intérpretes fijos o de plantilla acceden a la misma tras superar una oposición convocada por el Ministerio. Dicha prueba consiste en dos traducciones sin ayuda de diccionario ni otro material, directa e inversa, de textos judiciales para

cada idioma escogido por el opositor. Los traductores-intérpretes *contratados o interinos*, a los que únicamente se les requiere que sepan el idioma, no se les realiza ningún examen y se localizan a través de las listas de desempleo del Instituto Nacional del Empleo (INEM). Los traductores-intérpretes ocasionales (*freelance*) se inscriben en las listas de cualquier Gerencia Territorial o directamente en los juzgados y trabajan cuando sus servicios son requeridos.

Ninguna de las vías de acceso mencionadas anteriormente contempla como requisito indispensable el hecho de haber estudiado un grado en Traducción e Interpretación ni de haber recibido cualquier otro tipo de formación específica previa. Por un lado, el Ministerio de Justicia y el de Interior tan solo recogen el requisito general de haber estudiado bachillerato. Por el otro, el MAEC y el Ministerio de la Presidencia, así como las pruebas de traductor-intérprete jurado, son los únicos que requieren una titulación superior, cualquiera que sea esta. Consecuentemente, se está dando acceso a esta profesión a personas que no han recibido una formación en destrezas y/o habilidades tanto lingüísticas como de ética profesional, no sólo características de la profesión sino también necesarias para llevar a buen término las funciones como intérpretes en situaciones de tal especialización.

Directamente relacionado con esto, aunque desde otra perspectiva, podemos hacer alusión no solamente a la convocatoria, sino también a los propios exámenes de certificación. Estos exámenes ponen su foco de atención en los aspectos lingüísticos y terminológicos, dejando de lado la relevancia de la traducción oral (solamente hay prueba oral para acceder al cuerpo de traductores-intérpretes jurado) y el código ético que debe regir la actuación del intérprete judicial.

5. Funciones del intérprete judicial en el marco penal

A fin de introducirnos en una situación real donde un intérprete judicial se desenvuelve, veremos a continuación un esquema general de la trayectoria del procedimiento penal y sus respectivas fases, a lo largo de las cuales el intérprete puede ser requerido para prestar sus servicios. Generalmente, en este tipo de procedimientos suele tener actuación más de un intérprete.

Según Sali (2003) el proceso penal puede dividirse en tres estadios:

Fase inicial: comienza con el conocimiento de un hecho supuestamente delictivo a través de una denuncia o querella. En esta fase entrarían las declaraciones en el juzgado de guardia solo en el caso de que hubiese detenidos.

Fase intermedia: se define por la investigación de los presuntos hechos delictivos y la valoración por parte de la autoridad judicial. En esta fase no sólo se recaban las pruebas, sino también los testimonios de las partes implicadas. Varios de los procesos que se podrían llevar a cabo y que implicarían la presencia de un intérprete en esta fase serían los interrogatorios de los implicados (víctimas, acusados, testigos, etc...), los desplazamientos para la comprobación y reconstrucción de pruebas y hechos y, por último, las exploraciones médicas realizadas en las clínicas médico-forenses.

Fase del juicio oral (si ha lugar): cuando acaba la fase de instrucción de la causa, se establece la fecha y hora del juicio. Esta fase es considerada la más importante debido a que en ella se desarrollan los actos de prueba determinantes para fundar la sentencia que se dicte en su día.

La modalidad de interpretación que se desarrolla a lo largo del procedimiento penal es la consecutiva bilateral o de enlace. No obstante, en la fase del juicio oral y solamente tras la declaración del acusado, en ocasiones se utiliza la interpretación de *chuchotage* o *susurrada*, la cual consiste en comunicar al acusado, de forma resumida, el desarrollo del juicio y las intervenciones de cada persona, para que, de este modo, pueda hacer mención a aquello que considere oportuno para su defensa. Normalmente, los intérpretes se encargan también de hacer traducciones a la vista tanto de documentos jurídicos como no jurídicos, siempre y cuando formen parte del procedimiento judicial.

Como bien sabemos, la función principal del traductor/intérprete judicial es la traducción y la interpretación. Sin embargo, de manera habitual y sobre todo en determinados juzgados de localidades turísticas, se requiere de su labor en el puesto de información, entre otras cosas, para ayudar a la redacción de denuncias hechas por extranjeros o para atender a extranjeros proporcionándoles cualquier tipo de ayuda.

En definitiva, podemos observar que el desempeño de la profesión de intérprete judicial requiere una formación previa y continua para realizar un buen ejercicio profesional. Por ello, es necesario el establecimiento de unos mínimos exigibles para el buen desempeño de su profesión. Estos mínimos son aspectos éticos necesarios para garantizar el cumplimiento de determinados estatutos, como por ejemplo el de fidelidad, recogidos en los distintos códigos deontológicos como, por ejemplo, el de APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados) que se presenta en el siguiente apartado.

Por una parte, a fin de ofrecer un buen servicio, un intérprete judicial debe no sólo poseer una amplia competencia y variedad lingüística, además de reunir amplios conocimientos de lenguaje especializado en ambas lenguas de trabajo, sino también una gran capacidad de interpretar correctamente los matices que dicha oralidad conlleva, haciendo especial hincapié en el lenguaje no verbal de la comunicación (Sali, 2003).

Por otra parte, también debería considerarse necesario que el intérprete tenga conocimiento de derecho judicial nacional e internacional de las comunidades lingüísticas y jurídicas en cuestión y de los instrumentos jurídicos básicos de cooperación judicial internacional (Sali, 2003).

6. Código ético

En España, la actividad judicial dentro del marco penal se regula por dos artículos del Código Penal, incluidos en el Capítulo VI, “Del falso testimonio”, los cuales aluden directamente al comportamiento del intérprete:

Art.: 460—Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con reticencias, inexactitudes

o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.

Art.: 461.1—El que presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces, será castigado con las mismas penas que para ellos se establecen en los artículos anteriores.

La importancia del comportamiento del intérprete dentro del marco penal implica la necesidad de un código ético profesional a fin de establecer unos estándares relativos a la conducta del intérprete. El código ético o de conducta establece los estándares básicos de conducta profesional que recogen principios fundamentales, y para que sean efectivos y creíbles deben, con el auspicio de un organismo o registro lingüístico profesional, ser coherentes, transparentes y comprensibles para el público a nivel nacional. (Corsellis, 2010). No obstante, en nuestro país no existe una legislación para el cumplimiento del código ético en el ámbito judicial debido, entre otras cosas, a la falta de un registro a nivel estatal y/o gubernamental. Es por ello que se ponen en práctica o se recomienda el uso de aquellos códigos deontológicos que proporcionan algunas asociaciones, como es el caso de APTIJ o EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association).

APTIJ, una de las asociaciones más extendidas en este ámbito en España, es la única asociación española que ha planteado un código ético profesional de interpretación judicial. Defiende que la actuación de los traductores e intérpretes en el ámbito judicial debe determinarse por unos criterios éticos y profesionales para un buen funcionamiento y para garantizar los derechos de todos los implicados en el procedimiento. Para ello, modificó por última vez en 2010 su propio código deontológico que tomaremos como referencia y que establece los siguientes estatutos:

Fidelidad e integridad del texto o discurso	o La traducción o interpretación debe ser fidedigna, veraz y completa, sin alterar el contenido o la intencionalidad del mensaje.
---	---

Imparcialidad y ausencia de conflicto de intereses	El profesional se mantendrá imparcial, neutral e independiente. No se aceptarán regalos, gratificaciones o favores.
Confidencialidad	La información vertida no será revelada por parte del profesional.
Credenciales y cualificación	El profesional informará veraz y completamente de sus certificados, formación y experiencia.
Comportamiento profesional	El profesional mostrará un comportamiento profesional con los órganos de trabajo así como con los compañeros.
Límites de su ejercicio profesional	El profesional se limitará a realizar sus funciones.
Formación continua	Se fomentará la formación continua con cursos e interacción con colegas y especialistas de campos afines.

Cabe añadir que la importancia del concepto de fidelidad radica no sólo en transmitir el mensaje fidedignamente, sino también en la forma en la que se transmite este contenido; es decir, que en el ámbito judicial ambos aspectos son igual de cruciales, tanto qué se dice como la manera en la que se expresa. Sin embargo, los profesionales no sólo se limitan a utilizar códigos deontológicos propuestos por asociaciones a nivel estatal, sino que también pueden regirse por otros códigos presentados por asociaciones a nivel supranacional, como por ejemplo el código presentado por EULITA. EULITA es una asociación europea de traductores e intérpretes jurídicos, fundada en 2009, que colabora con instituciones de la UE, así como con organizaciones y asociaciones europeas e internacionales que operan en este ámbito. Una de las prioridades de esta asociación es promover la cooperación entre las instituciones públicas, los servicios jurídicos y los colegios profesionales, así como introducir entre ellos las mejores prácticas laborales. Para ello, adoptaron en 2013 un código ético (Anexo I) que recoge los fundamentos de la conducta del intérprete. Estos fundamentos

son: competencia profesional, precisión, obstáculos para la calidad de la interpretación, imparcialidad, confidencialidad, protocolo y comportamiento, solidaridad y buena conducta.

Comparando el código deontológico de APTIJ con el de EULITA podemos observar que ambos coinciden en nombre y descripción con varios de los principios recogidos (imparcialidad y confidencialidad). Asimismo, encontramos que la gran mayoría de los demás tienen diferente denominación, pero coinciden en cuanto a la descripción de los mismos o se asimilan a estos: competencia profesional (EULITA) y formación continua (APTIJ), precisión (EULITA) y fidelidad (APTIJ), protocolo y comportamiento/solidaridad y buena conducta (EULITA) y comportamiento profesional/límites de su ejercicio profesional (APTIJ). Si bien existe una similitud entre ambos códigos, APTIJ recoge un estatuto no planteado en el código deontológico de EULITA y viceversa, siendo estos dos estatutos credenciales y cualificación (APTIJ) y obstáculos para la calidad de la interpretación (EULITA).

7. Estudio empírico

Con el fin de adentrarnos más detenidamente en la percepción de la figura del intérprete judicial, se ha llevado a cabo un estudio empírico que ha consistido en un cuestionario (Anexo II) respondido por ocho operadores judiciales. El cuestionario ha sido proporcionado por la tutora de este trabajo (Jiménez Ivars, en prensa). De este cuestionario, he elegido y traducido veintiséis preguntas adaptadas al contexto judicial.

Con este estudio se pretende ofrecer una aproximación a la profesionalidad del intérprete en el ámbito judicial y la calidad de los servicios prestados por los intérpretes según la percepción de los operadores judiciales.

7.1 Cuestionario

Las preguntas de este cuestionario atienden a los siguientes aspectos: aspectos sociológicos, aspectos relacionados con la percepción del operador judicial sobre la profesionalidad del intérprete, sus expectativas frente a ellos y su satisfacción en cuanto a los servicios prestados.

Las preguntas de este cuestionario son heterogéneas:

- a) Preguntas abiertas. Corresponden a preguntas en las que el operador judicial es libre a la hora de dar respuesta.
- b) Preguntas cerradas. Corresponden a dos tipos: por un lado, aquellas en las que se plantea una premisa y los operadores pueden optar entre las posibles respuestas, siendo algunas de estas sí/familiarizado, no/no familiarizado, tal vez (respuesta neutral, indica que a veces sí y a veces no). Por otro lado, se plantean diferentes juicios de valor que deben calificarse del uno al cinco.

7.2 Procedimiento

La búsqueda de operadores judiciales por mi cuenta no fue muy efectiva, pues muchos se mostraban reticentes a participar en el estudio. Es por ello que acabé contactando con un familiar que me proporcionó una lista de noventa y dos operadores judiciales de Castellón. Tras solicitar la cooperación de todos

ellos por correo electrónico, solamente ocho acabaron formando parte del estudio. Así pues, les remití por correo electrónico un enlace a un formulario Google que elaboré con las preguntas.

7.3 Resultados

A continuación, se muestran los datos obtenidos. Éstos se distribuyen en cinco subepígrafes:

- a) Perfil sociológico: perfil de los operadores judiciales que han participado en la encuesta.
- b) Trabajo con el intérprete: actividad del operador judicial en la que interviene un intérprete.
- c) Actividades proactivas del intérprete: comportamiento del intérprete por iniciativa propia.
- d) Expectativas del operador judicial: comprende respuestas en cuanto a qué espera el operador judicial de la labor del intérprete y su satisfacción con los servicios obtenidos.
- e) Satisfacción obtenida.

7.3.1 Perfil sociológico

Este cuestionario ha sido respondido bajo consentimiento por ocho operadores judiciales (seis hombres y dos mujeres), mayoritariamente de cuarenta a cincuenta años de edad (cuatro), con Licenciatura en Derecho (ocho) y Máster en Abogacía (dos). Sus puestos de trabajo son Abogado (siete) y Jefe Unidad de Recaudación Ejecutiva, Tesorería General de la Seguridad Social (uno). Además, cuatro de ellos afirman saber otros idiomas (inglés).

7.3.2 Trabajo con el intérprete

Describa brevemente la actividad que ejerce en relación a trabajar con usuarios e intérpretes:	Participantes
Gestión de expedientes de apremio por deudas	1
Asistencia letrada y defensa jurídica	1
Traducción a los testigos/clientes en procedimientos judiciales, sede policial	5
Traducción a la vista de documentos	1

Frecuencia de trabajo con intérpretes <i>in situ</i> :	Participantes
Cada cierto tiempo	5
Normalmente	2
Raramente	1

Frecuencia de trabajo con intérpretes a distancia (online, por teléfono):	Participantes
Cada cierto tiempo	2
Alguna vez	2
Nunca	4

¿Cómo accede a un intérprete cuando lo necesita?	Participantes
Designación judicial	5
Conocido del cliente	2
Conocido con anterioridad	2
Por internet	1

	Sí	No	Tal vez
El operador judicial tiene constancia de si el intérprete es profesional	4	2	2
El operador judicial tiene constancia de si al intérprete se le paga	5	1	2
El operador judicial podría diferenciar entre un intérprete profesional y uno no profesional	5	1	2

	Sí	No	Tal vez
El operador judicial confía en el intérprete	7	1	-
El operador judicial proporciona información al intérprete antes de la sesión	6	2	-
El operador judicial considera al intérprete como un compañero de trabajo	4	4	-
Los usuarios consideran que el operador judicial y el intérprete forman un equipo	-	6	2
El operador judicial le habla directamente al usuario	2	5	1
El intérprete habla en primera persona	2	3	3
El intérprete se sienta al lado del operador judicial	5	3	-
El intérprete toma notas	2	6	-

7.3.3 Actividades proactivas del intérprete

	Sí	No	Tal vez
Actúa como defensor del usuario	4	2	2
Adapta el idioma	6	-	2
Explica los términos especializados	5	-	3
Calma al usuario	4	2	2
Ayuda en situaciones con carga emocional	2	3	3
Hace preguntas adicionales	1	5	2
Explica las diferencias culturales	2	4	2
Regaña al usuario	-	8	-
Regaña al operador judicial	-	8	-
Se relaciona con el usuario	2	6	-
Media para la resolución de conflictos	3	4	1
Coordina el flujo de las conversaciones (por turnos)	3	4	1
Aconseja o da su opinión	1	7	-
Actúa como un compañero de trabajo	1	6	1
Pregunta si su interpretación ha sido entendida	4	3	1
Mantiene una conversación privada con el operador judicial/usuario	2	6	-
No puede traducir ciertas preguntas culturalmente sensibles	-	8	-
Hace que los usuarios se sientan cómodos	7	1	-

Califique los siguientes rasgos de los intérpretes con los que haya trabajado del 1 al 5; 1 siendo totalmente irrelevante o incluso inapropiado y 5 siendo extremadamente importante:

	1	2	3	4	5
Precisión		1		1	6
Fidelidad		1	2		5
Neutralidad		1		3	4
Transparencia		1		3	4
Imparcialidad			3	1	4
Confidencialidad		1		1	6
Confiabilidad		1	2	3	2
Proactividad		1	3	3	1
Empatía		2	4		2
Capacidad psicológica		1	4	3	

7.3.4 Expectativas del operador judicial

Comparación del estatus social del intérprete como:	
Inferior a un profesor de primaria	3
Como un profesor de primaria, una enfermera, un trabajador social	2
Como un profesor de secundaria, biólogo, periodista	2
Como un abogado, médico, profesor universitario	1
Como un director ejecutivo, gerente de finanzas, legislador	-

¿Qué espera de un intérprete cuando trabajas con él?	
	Participantes
Conseguir una comunicación plena y comprensión	3
Fidelidad e inmediatez	5
Profesionalismo e imparcialidad	2
No resumir	2

	Sí	No	Tal vez
Que calme al usuario si es necesario	6	2	-
Que aclare los términos especializados	6	2	-
Que adapte el idioma	7	1	-
Que resuma	1	7	-
Que apoye al usuario en situaciones de carga emocional	6	2	-
Que explique las diferencias culturales	4	3	1
Que se ponga de su lado	2	6	-
Que regañe al usuario	-	8	-
Que regañe al operador judicial	-	8	-
Que dé su opinión o aconseje	1	6	1
Que medie para la resolución de conflictos	4	4	-
Que explique los procedimientos al usuario	6	1	1
Que aclare detalles en una pausa o después de que la sesión haya terminado	5	2	1
Que realice otras tareas no relacionadas con la interpretación	2	4	2
Que juzgue o mida la credibilidad del usuario	-	8	-

Calificación del 1 al 5 la importancia de los rasgos de los intérpretes; 1 siendo totalmente intrascendente o incluso indiferente y 5 siendo extremadamente importante:

	1	2	3	4	5
Que el intérprete comparta nacionalidad con el usuario	4	1	1	1	1

Que el intérprete tenga conocimientos en el ámbito	2	2	2	1	1
Que el intérprete comparta valores con el usuario	4	2	2	-	-
Que el intérprete comparta valores culturales con el operador judicial	5	3	-	-	-
Que el intérprete tenga habilidades interpersonales	1	-	2	5	-
Que el intérprete tenga habilidades de mediación	1	1	3	3	-
Que el intérprete tenga valores éticos	1	-	6	1	-
Que el intérprete sea invisible, prácticamente una máquina de voz	2	2	3	1	-

7.3.5 Satisfacción obtenida

Calificación del 1 al 5 de la satisfacción en cuanto a la labor del intérprete; 1 siendo nefasta y 5 siendo espléndida:

	1	2	3	4	5
La satisfacción con respecto a la calidad del servicio ofrecido por los intérpretes:	1	-	1	5	1
La labor del intérprete ha ayudado al usuario a conseguir sus objetivos:	1	-	-	3	4
La labor del intérprete ha mejorado las condiciones para el usuario:	-	-	-	4	4
La labor del intérprete ha facilitado el trabajo de los operadores judiciales con el usuario	-	-	-	2	6

¿Qué sugeriría para mejorar el servicio de enseñanza de idiomas?	Participantes
Trabajar con nativos para mejorar la pronunciación	3
Puntualidad	1
Prácticas, viajes y estancias en otros países	2

i)

7.4 Discusión

En este apartado hablaremos de los resultados más significativos del estudio. Siguiendo el orden anterior en el que se han expuesto los resultados, con respecto a las cuestiones referidas en el punto 7.3.1 (perfil sociológico) el hecho de que cuatro de los ocho participantes sepan inglés puede justificar que centren el peso del trabajo del intérprete en el componente lingüístico.

Por lo que respecta a las cuestiones referidas en el punto 7.3.2 (trabajo con el intérprete) la respuesta más común a la hora de describir la actividad ejercida en relación a trabajar con intérpretes es “la traducción a los testigos/clientes en procedimientos judiciales, sede policial”. De esta respuesta cabe destacar la inclusión de la labor del intérprete en sede policial también forma parte de un procedimiento judicial. Otra respuesta que se debe tener en cuenta en esta pregunta es “la traducción a la vista de documentos”, ya que como hemos mencionado anteriormente en el trabajo, la traducción a la vista también puede formar parte de un procedimiento judicial y es algo que la mayoría de los operadores judiciales pueden no tener en cuenta, pues únicamente una persona ha dado esta respuesta en la encuesta. La interpretación judicial presencial prevalece sobre la interpretación a distancia. En cuanto al acceso a los servicios de interpretación prevalece la respuesta “designación judicial”, apoyada por cinco de los participantes. Dos de los participantes han respondido a esta pregunta “conocido del cliente”. Es importante recalcar que esto es una mala praxis, consecuencia directa de la falta de regulación de la profesión. Cinco de los ocho participantes no hablan directamente al usuario. Dicha respuesta es muestra de que la mayoría de operadores judiciales no saben cómo trabajar con un intérprete.

En cuanto a los resultados obtenidos del apartado 7.3.3 (actividades proactivas del intérprete) se destaca que el intérprete actúa como defensor del usuario. Esta respuesta va en contra del principio de imparcialidad recogido en los códigos de conducta que un intérprete profesional debería seguir.

Atendiendo a las cuestiones referidas en el punto 7.3.4 (expectativas del operador judicial) solamente dos participantes esperan del intérprete que no resuma. En la interpretación judicial es crucial que se traduzca de manera completa y fidedigna y que no se altere ni el contenido ni la intencionalidad del mensaje. Se espera del intérprete que aclare los términos especializados. El intérprete no debería hacer comentarios ni aclaraciones externas, se debería ceñir simplemente a interpretar todo lo que se diga en sala. Se espera del intérprete que calme al usuario o lo apoye en situaciones de carga emocional. Esta conducta también va en contra de lo recogido en los códigos éticos ya que el intérprete debería limitarse a posibilitar la comunicación entre las partes afectadas. Se espera del intérprete que aclare detalles en una pausa o después de que la sesión haya terminado. Toda aclaración de detalles se debe hacer en sala pues el intérprete no debe mantener ningún tipo de contacto con las partes implicadas. Se considera totalmente intrascendente e indiferente, apoyado por seis participantes, que el intérprete tenga conocimientos en el ámbito. Es de vital importancia reunir amplios conocimientos de lenguaje especializado en ambas lenguas, dado que el ámbito judicial-penal requiere de su conocimiento, pues trata temas de alta sensibilidad y cualquier fallo de traslación entre idiomas puede acarrear consecuencias de gran magnitud. Por último, mayoritariamente se ha comparado el estatus social del intérprete con una figura inferior a un profesor de primaria. Esta respuesta nos evidencia que no se considera el prestigio social del intérprete ni que sea un profesional con alto nivel de estudios.

8. Conclusiones

La realización de este trabajo ha supuesto para mí la posibilidad de ampliar mis conocimientos en el tema de la interpretación judicial en España, puesto que la introducción a este tema en la asignatura TI0954 Mediación Intercultural e Interpretación A1 (Español) - B (Inglés) / B (Inglés) - A1 (Español) me incentivó a profundizar en ello. Los objetivos de este trabajo eran entender las raíces de la profesión del intérprete judicial, visualizar la situación de nuestro país, dar una aproximación a la cuestión de si en España es necesario un registro de traductores e intérpretes debidamente cualificados y estudiar el estatus social del intérprete, concretamente en el ámbito judicial, en la ciudad de Castellón.

El haber indagado el estado de la profesión en nuestro país ha respondido a dos de los objetivos. Por un lado, el de visualizar la situación previa y actual en España. Al ahondar en la historia de nuestra profesión para conocer las raíces de la interpretación judicial en España entendemos que se ha intentado regular desde sus albores. Por contra, actualmente predomina el modelo de contratas, como ya se ha explicado anteriormente. Por el otro lado, ha dado respuesta a la cuestión de si es necesario un registro de traductores e Intérpretes cualificados. De acuerdo con la Directiva 2010/64/UE, un registro de Traductores e Intérpretes sería sinónimo de garantía del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva. La falta de dicho registro va en detrimento de todas las partes implicadas en el proceso judicial, así como de los traductores e intérpretes formados que luchan por unas condiciones justas de trabajo.

Finalmente, en lo que respecta al estudio del estatus social del intérprete es de vital importancia hacer alusión a la última conclusión del apartado 7.4 (Discusión). Si bien la muestra elegida para este estudio ha sido limitada (de tan solo ocho personas, ya que fue complicado contactar con operadores judiciales que finalmente quisieran participar en el estudio) y no debe extrapolarse a lo que puedan pensar el resto de operadores judiciales, sí resulta preocupante que la mayoría de los participantes hayan respondido que el prestigio de un intérprete judicial es inferior al de un profesor de primaria. Esto evidencia el desconocimiento de que el intérprete judicial es una pieza clave para asegurar el derecho a un juicio justo cuando existen barreras lingüísticas. Esta conclusión ha sido la más relevante, por lo que confiere su nombre al trabajo.

Desde nuestra posición de traductores e intérpretes a punto de finalizar nuestra formación, debemos luchar para acabar con los mitos de que, hoy en día, cualquiera puede ejercer como traductor o intérprete. Una traducción o interpretación no sólo es la “acción o efecto de traducir” como encontramos en la RAE, sino que es mucho más, pues trasciende hasta contextos sociopolíticos, intencionalidades, culturas, lenguaje no verbal, entre muchos otros aspectos que, parece ser, casi nadie tiene en cuenta a la hora de pensar en una traducción o interpretación. Es nuestro deber no sólo exigir unas condiciones de trabajo justas, sino hacer comprender tanto a la población leiga, así como a los organismos institucionales que contar con intérpretes judiciales profesionales es

sinónimo de garantía de la calidad y acceso por parte de todos los usuarios al sistema de Justicia que cumpla las máximas de igualdad y equidad ante la misma.

9. Bibliografía

Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (2010): Código deontológico para intérpretes y traductores judiciales y jurados. [Última fecha de consulta: 15/04/2020] Disponible en: <http://www.aptij.es/>

Blasco Mayor, María Jesús y del Pozo Triviño, Maribel (2015). *La interpretación judicial en España en un momento de cambio*. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación.

Caceres Wursig, Ingrid, & Perez Gonzalez, Luis (2003). *Antecedentes históricos y proyección futura de la figura del intérprete jurado en España*. Universidad de Valladolid, Facultad de Traducción e Interpretación.

Cáceres Würsig, Ingrid (2004). *Historia de la traducción en la administración y en las relaciones internacionales en España* (s. XVI-XIX). Diputación Provincial de Soria.

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. [Última fecha de consulta: 21/03/2020] Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/1>

Corsellis, Ann., Cobas Álvarez, Rosa, & Valero-Garcés, Carmen (2010). *Traducción e interpretación en los servicios públicos*. Granada: Comares.

Diccionario del español jurídico - Real Academia Española. Diccionario del español jurídico - Real Academia Española. (2020). [Última fecha de consulta: 17/03/2020] Disponible en: <https://dej.rae.es/>

España. Ley 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado, 28 de abril de 2015, núm. 101, pp. 36599 a 36684 [Última fecha de consulta: 24/05/2020] Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/5>

España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, pp. 33987 a 34058 [Última fecha de consulta: 03/06/2020] Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con>

European Legal Interpreters and Translators Association. EULITA. (2020). [Última fecha de consulta: 17/04/2020] Disponible en: <https://eulita.eu/>

Jiménez Ivars, Amparo. (en prensa) "Impartiality and accuracy as a case in point while interpreting in a refugee context." FORUM. 15.2

Lobato Patricio, Julia (2009). *La traducción jurídica, judicial y jurada: vías de comunicación con las administraciones*. Entreculturas, (1), [Última fecha de consulta: 08/04/2020] Disponible en: <http://www.entreculturas.uma.es/>

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación (2020). [Última fecha de consulta: 19/05/2020] Disponible en: <http://www.interior.gob.es/>

Ministerio de Justicia (2020). [Última fecha de consulta: 18/05/2020] Disponible en: <https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio>

Ortega Herráez, Juan Miguel (2006). *Análisis de la práctica de la interpretación judicial en España: el intérprete frente a su papel profesional*. (tesis doctoral) Universidad de Granada.

Ortega Herráez, Juan Miguel (2011). *Interpretar para la justicia*. Granada: Comares.

Peñarroja, Josep (2000). Historia de los Intérpretes Jurados en España. En Jose Antonio Sabio Pinilla, José Ruiz, & Juan de Manuel Jerez (Eds.), *Conferencias del curso académico 1999/2000: volumen conmemorativo del XX aniversario de los estudios de traducción e interpretación de la Universidad de Granada*. (pp. 161- 178). Granada: Comares.

Roberts, Roda. 1997. Community interpreting today and Tomorrow. En Silvana. Carr et ál. (eds.), *The Critical Link: Interpreters in the Community*, Ámsterdam.

Sali, Mohamed (2003). Traducción e Interpretación en la administración de Justicia. En Carmen. Valero Garcés, *Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos. Contextualización, actualidad y futuro*. Granada: Comares.

UNIÓN EUROPEA. PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO. *Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales*. En Diario Oficial de la Unión Europea (en línea). Estrasburgo. [Última fecha de consulta: 01/06/2020] Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF>

Valero-Garcés, Carmen, (2008). *Formas de mediación intercultural: traducción e interpretación en los servicios publicos*. Granada: Comares.

Valero-Garcés, Carmen, 2003. *Traducción e interpretación en los servicios públicos*. Granada: Comares.

11. Anexos

11.1 Código ético de EULITA

EULITA Code of Professional Ethics adopted by the EULITA General Assembly in London, 6 April 2013

Preamble One of the main objectives of the European Association for Legal Interpreters and Translators (EULITA) is to represent its full and associate member associations, as well as its associated individual members at European level. EULITA therefore has the responsibility to draft a code for legal interpreters and legal translators working in judicial contexts or similar settings, such as pre-trial proceedings (i.e. interviews with police and prosecution officers, consultations with defence counsels), court hearings and post-trial interventions. The Code and its underlying principles are outlined below. The professional ethics of legal interpreters and legal translators derive directly from the principles that are defined in the following sources. They demonstrate the key role of legal interpreters and legal translators in the search for truth and how their work may affect the life and rights of others:

- The Universal Declaration of Human Rights, December 1948 (Articles 1-11)
- The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, November 1950 (Articles 5 and 6)
- The Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/C 364/01), CHAPTER III – Articles 20 – 21, CHAPTER VI – Articles 47 – 50
- Directive 2010/64/EU of the European Parliament and Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings

Legal interpreters and legal translators thus play an essential role in all efforts to ensure the equality of citizens in justice-related communications. The members of EULITA have accepted this Code and comply with its articles.

Definition of Terms For the purposes of this Code, the following terms shall have the following meaning:

Legal interpreter and/or legal translator: Legal interpreters and/or legal translators are professionals who are qualified to interpret spoken language and/or sign language, and/or to translate written language.

Consecutive interpreting: The interpreter renders the interpretation after the source-language speaker has finished speaking or signing. Spoken-language interpreters can use special note-taking techniques to help in the rendering of lengthy passages.

2 Simultaneous interpreting: The interpreter transfers the message from the source language into the target language while the source-language speaker speaks or signs continuously. This is the mode commonly used in sign-language interpreting as well as in conference settings.

Whispering (chuchotage): Simultaneous interpreting without the use of interpreting booths usually provided for a maximum of three persons.

Sight translation: It is required for the ad-hoc oral translation of documents. The source-language document is rendered orally or signed in the target language as if it were written in the target language.

Intercultural competence: Professional awareness and understanding of the cultural factors, including but not limited to, behaviour and gestures, tone, values, roles, institutions, as well as linguistic differences and similarities.

Professional Competence Legal interpreters and legal translators shall use the specific interpreting technique (consecutive, simultaneous, whispering, sight translating) according to the requirements for optimum cross-cultural communication in legal settings. Legal

interpreters and legal translators must not take on an assignment for which they have no or inadequate competences (in terms of language or subject matter), or which they are not able to perform properly (e.g. for lack of time to prepare for the assignment). Legal interpreters and legal translators shall strive to maintain and improve their interpreting and translation skills and knowledge.

Accuracy The source-language message shall be faithfully rendered in the target language by conserving all elements of the original message while accommodating the syntactic and semantic patterns of the target language. The register, style and tone of the source language shall be conserved. Errors, hesitations and repetitions should be conveyed. An interpreter shall request clarification when he or she did not understand a sign-language user or speaker, for example for reasons of acoustics, or ambiguity of a statement. He or she shall signal and correct any interpreting errors as soon as possible.

Obstacles to Performance Quality Legal interpreters and legal translators shall bring to a court's*) attention any circumstance or condition that affects the quality of performance such as interpreter fatigue, inability to hear and/or see, inadequate knowledge of the specialized terminology, insufficient understanding of a dialect. They must decline assignments that would have to be delivered under conditions that make a qualified professional performance impossible.

Impartiality Legal interpreters and legal translators shall remain neutral and also maintain the appearance of impartiality, avoiding any undue contacts with either witnesses, defendants and their families or members of the legal professions. Any potential conflict of interest shall be immediately disclosed to the court*).

Confidentiality Legal interpreters and legal translators shall be bound by the strictest secrecy. Any information acquired in the course of an interpreting or translation assignment for judicial purposes or its preparation shall not be disclosed. Legal interpreters and legal translators shall refrain from deriving any personal or financial benefit from information they have acquired in the course of an interpreting or translation assignment for judicial purposes, or its preparation.

Protocol and Demeanour Legal interpreters and legal translators shall behave with dignity and respect towards the court*) and perform their duties as unobtrusively as possible. Legal interpreters shall use the same grammatical person as the speaker or sign-language user. Should it become necessary for them to assume a primary role in the communication, they must make it clear that they are speaking for themselves, by using for instance the third person (i.e.: "The interpreter needs to seek clarification...")

Legal interpreters and legal translators shall refrain from giving advice to the parties or otherwise engage in activities others than the ones belonging to the actual assignment.

Solidarity and Fair Conduct Legal interpreters and legal translators shall act in a spirit of respect, cooperation and solidarity towards their colleagues.*) applies to all legal settings. EULITA recommends that specific Codes of Best Practices should be drafted by the respective judicial administrations in cooperation with the representatives of legal interpreters and translators working for them.

11.2 Cuestionario

i) Encuesta

ii) Bloque de preguntas por defecto (1 pregunta)

Estándar: (12 preguntas)

Profesionalidad (14 preguntas)

Inicio: pregunta por defecto

Q1 Esta encuesta forma parte de un proyecto de investigación que pretende estudiar cómo superar las barreras idiomáticas en los procesos legales. La investigadora principal es una estudiante de la Universitat Jaume I de Castellón, España, que está elaborando su trabajo de final de grado. Está invitado a participar en este proyecto de investigación debido a que en su trabajo asiste, a través de intérpretes, a usuarios con conocimientos limitados en cuanto al idioma. Si no está seguro de que las personas con las que trabaja sean usuarios, considérelas como extranjeros. Se le preguntará sobre las personas encargadas de traducir/interpretar para usted cuando se comunica con ellos. Su participación en este estudio de investigación es voluntaria y anónima. El procedimiento consiste en completar una encuesta que consta de 26 preguntas, la mayoría de ellas de opción múltiple. Le tomará aproximadamente 10 minutos. La encuesta no contiene información que lo identifique personalmente a usted o a la agencia para la que trabaja, en caso de haberla. Los resultados de este estudio se utilizarán sólo con fines académicos y podrán ser compartidos con las universidades y profesores involucrados. Su aportación es muy valiosa para nosotros ya que contribuirá a identificar los puntos fuertes y débiles de la calidad de la interpretación en este ámbito. Si nunca se ha comunicado con los usuarios a través de un intérprete, este estudio no está destinado a usted.

Inicio

Q2 ¿Da usted el consentimiento de participar en este proyecto?

- ☐ Sí (1) ☐ No (2)

Q3 Rango de edad:

- ☐ 20-30 (1) ☐ 31-40 (2) ☐ 41-50 (3) ☐ 50-60 (4) ☐ +60 (5)

Q4 Sexo:

- ☐ Hombre (1)
- ☐ Mujer (2)
- ☐ Sin respuesta(3)

Q5 Estudios:

- ☐ Educación secundaria
- ☐ Estudios universitarios
- ☐ Máster
- ☐ Doctorado
- ☐ Más

Q6 En caso de estudios universitarios, máster o doctorado, por favor especifique cuál:

Q7 Puesto de trabajo:

Q8 Por favor, describa brevemente la actividad que realiza en relación a trabajar con usuarios e intérpretes:

Q9 ¿Es conocedor de alguna lengua extranjera? En caso que sí, por favor indique cuál/cuáles:

Q10 ¿Con qué frecuencia trabaja con intérpretes in situ, cara a cara? (Nunca, una vez cada cierto tiempo, normalmente, día a día...):

Q11 ¿Con qué frecuencia trabaja con intérpretes a distancia (por teléfono u online)? (Nunca, una vez cada cierto tiempo, normalmente, día a día...):

Q12 ¿Cómo accede a un intérprete cuando lo necesita?

Profesionalidad

Q13 En su opinión, ¿cómo se compara el estatus social de un intérprete con otros trabajos?

- ☐ Menos que un profesor de primaria (1)
- ☐ Como un profesor de primaria, una enfermera, un trabajador social (2)
- ☐ Como un profesor de secundaria, biólogo, periodista (3)
- ☐ Como un abogado, médico, profesor universitario (4)
- ☐ Como un director ejecutivo, gerente de finanzas, legislador (5)

Q14 ¿Sabe si los intérpretes con los que trabaja son profesionales?

- ☐ Definitivamente sí (1)
- ☐ Probablemente sí (2)
- ☐ No lo sé (3)
- ☐ Probablemente no (4)

- Definitivamente no (5)

Q15 ¿Sabe si se les paga en su mayoría?

- Definitivamente sí (1)
- Probablemente sí (2)
- No lo sé (3)
- Probablemente no (4)
- Definitivamente no (5)

Q16 ¿Podría diferenciar entre un intérprete profesional y uno no profesional?

- Definitivamente sí (1)
- Probablemente sí (2)
- No lo sé (3)
- Probablemente no (4)
- Definitivamente no(5)

Q17 Si puede diferenciar entre un intérprete no profesional y uno profesional, por favor explíquelo brevemente:

Q18 ¿Qué espera de un intérprete cuando trabajas con él?

Q19 Estas declaraciones se refieren a lo que el intérprete hace por iniciativa propia.

Marque si está familiarizado con estas situaciones en relación con las **actividades proactivas del intérprete** mientras interpreta para usted, es decir, **sin que usted o alguien le pida que lo haga.**

1. El intérprete actúa como defensor del usuario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
2. El intérprete adapta el idioma si es necesario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
3. El intérprete explica los términos técnicos o jurídicos
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
4. El intérprete calma al usuario.
 - a) No.
 - b) Sí.

- c) Tal vez.
- 5. El intérprete ayuda en situaciones con carga emocional
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 6. El intérprete hace preguntas adicionales
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 7. El intérprete explica las diferencias culturales
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 8. El intérprete regaña al usuario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 9. El intérprete le regaña a usted
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 10. El intérprete se relaciona con usuario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 11. El intérprete media para la resolución de conflictos
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 12. El intérprete coordina el flujo de las conversaciones (turnos)
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 13. El intérprete aconseja o da su opinión
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 14. El intérprete actúa como su compañero de trabajo
 - a) No.
 - b) Sí.

- c) Tal vez.
- 15. El intérprete pregunta si su interpretación ha sido entendida
 - a) No.
 - b) Sí
 - c) Tal vez.
- 16. El intérprete mantiene una conversación privada con usted o con el usuario sin traducirla.
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 17. El intérprete le dice que no puede traducir ciertas preguntas culturalmente sensibles
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 18. El intérprete hace que los usuarios se sientan cómodos
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.

Q20 Califique los siguientes rasgos de los intérpretes del 1 al 5; 1 siendo totalmente irrelevante o incluso inapropiado y 5 siendo extremadamente importante.

1. Precisión:
2. Fidelidad:
3. Neutralidad:
4. Transparencia:
5. Imparcialidad:
6. Confidencialidad:
7. Confiabilidad:
8. Proactividad:
9. Empatía:
10. Capacidad psicológica:

Q21 Esta pregunta es sobre lo que quieres o le pides al intérprete que haga. Califique si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre su procedimiento habitual al trabajar con intérpretes. Todas las preguntas comienzan con: **Del intérprete espero/ le pido al intérprete que...**

1. Calme al usuario si es necesario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
2. Aclare los términos técnicos o jurídico
 - a) No.
 - b) Sí.

- c) Tal vez.
- 3. Adapte el idioma si necesario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 4. Resuma
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 5. Apoye o ayude al usuario en una situación de carga emocional
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 6. Explique las diferencias culturales
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 7. Se ponga de su lado
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 8. Regañe al usuario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 9. De su opinión o aconseje
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 10. Medie para la resolución de conflictos
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 11. Explique los procedimientos al usuario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
- 12. Aclarar o explicar los detalles al usuario durante una pausa o después de que la sesión haya terminado.
 - a) No.

- b) Sí.
 - c) Tal vez.
13. Realizar otras tareas no relacionadas con la interpretación como ayudar a los usuarios a rellenar formularios, hacerles compañía, llevarlos a otro lugar, etc.
- a) En desacuerdo.
 - b) De acuerdo.
 - c) No sabe/no contesta.
14. Juzgar/Medir la credibilidad de los usuarios
- b) No.
 - c) Sí.
 - d) Tal vez.

Q22 Evalúe su familiaridad con las siguientes situaciones mientras trabaja con los intérpretes.

1. El enfado o la tristeza del usuario también se dirigen al intérprete
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
2. Los usuarios les consideran a usted y al intérprete una unidad
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
3. El intérprete toma notas
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
4. El intérprete se sienta a su lado
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
5. Usted le proporciona información al intérprete antes de la sesión
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
6. Usted le habla directamente al usuario
 - a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
7. Usted confía en el intérprete
 - b) No.
 - c) Sí.
 - d) Tal vez.

8. El intérprete habla en primera persona cuando traduce
- a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
9. Usted considera al intérprete como un compañero de trabajo, parte de su equipo.
- a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.
10. La entidad para la que trabaja ofrece formación para intérpretes
- a) No.
 - b) Sí.
 - c) Tal vez.

Q23 Califique de 1 a 5 la importancia de los siguientes rasgos de los intérpretes. 1 es totalmente intrascendente o incluso indiferente y 5 es extremadamente importante.

- 1. Compartir la nacionalidad o el origen étnico con usuario:
- 2. Poseer un amplio conocimiento en relación al ámbito:
- 3. Compartir valores culturales con el usuario:
- 4. Compartir valores culturales con usted:
- 5. Poseer habilidades interpersonales:
- 6. Poseer habilidades de mediación:
- 7. Ser prácticamente invisible; una máquina de voz:
- 8. Poseer grandes valores éticos:

Q24 En general, ¿cómo evaluaría su satisfacción con respecto a la calidad del servicio ofrecido por los intérpretes/traductores? (1 siendo nefasta, 5 siendo excelente).

Q25 Por favor, califique del 1 al 5 en qué medida los servicios de interpretación contribuyen a los siguientes objetivos. 1 siendo nada y 5 siendo absolutamente sí.

- 1. Ayudar a los usuarios a conseguir sus objetivos:
- 2. Mejorar las condiciones para el usuario:
- 3. Facilitar su trabajo con los usuarios:

Q26 ¿Qué sugeriría para mejorar el servicio de enseñanza de idiomas?

Q27 Siéntase libre de añadir cualquier otro comentario. Experiencias en eventos mediados por intérpretes, debilidades en cuanto a lenguaje especializado y/o idiomas, etc.

Muchas gracias por su colaboración □□□